

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 295/2020

**PROMOVENTE: COMISIÓN NACIONAL DE LOS
DERECHOS HUMANOS**

SUBSECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS

**SECCIÓN DE TRÁMITE DE CONTROVERSIAS
CONSTITUCIONALES Y DE ACCIONES DE
INCONSTITUCIONALIDAD**

En la Ciudad de México, a veinticuatro de noviembre de dos mil veinticinco, se da cuenta al **Ministro Hugo Aguilar Ortiz, Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación**, con el estado procesal del expediente. Conste.

Ciudad de México, a veinticuatro de noviembre de dos mil veinticinco.

Estudio sobre el cumplimiento de la ejecutoria.

Visto el estado procesal del presente asunto, se provee lo conducente respecto del análisis del cumplimiento de la sentencia dictada en esta acción de inconstitucionalidad.

Para tales efectos, es importante precisar que el siete de junio de dos mil veintidós, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación dictó sentencia bajo los siguientes resolutivos:

“PRIMERO. Es procedente y fundada la presente acción de inconstitucionalidad.

SEGUNDO. Se declara la invalidez del DECRETO 748, por el que se reforman los artículos 782, 783 y 784 del Código Civil para el Estado de Coahuila de Zaragoza, publicado en el Periódico Oficial de dicha entidad federativa el veinte de octubre de dos mil veinte, de conformidad con el apartado VI de esta decisión.

TERCERO. La declaratoria de invalidez decretada surtirá sus efectos a los doce meses siguientes a la notificación de estos puntos resolutivos al Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza, en la inteligencia de que, dentro del referido plazo, previo desarrollo de la respectiva consulta a las personas con discapacidad, ese Congreso deberá legislar en los términos precisados en los apartados VI y VII de esta ejecutoria. (...)”

En el referido fallo se indicaron los siguientes efectos:

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 295/2020

“VII. EFECTOS.

70. Conforme a lo dispuesto en los artículos 41, fracción IV, y 73 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución General, las sentencias dictadas en acciones de inconstitucionalidad deberán establecer sus alcances y efectos, fijando con precisión, las normas o actos respecto de los cuales opere y todos aquellos elementos necesarios para su plena eficacia en el ámbito que corresponda.

71. **Declaración de invalidez.** Conforme al apartado anterior, este Tribunal Pleno declara la invalidez del decreto por el que se reformaron los artículos 782, 783 y 784 del Código Civil para el Estado de Coahuila de Zaragoza, publicado en el Periódico Oficial de esa entidad el veinte de octubre de dos mil veinte por falta de consulta a personas con discapacidad.

72. Al respecto, se debe señalar que, en atención a la evolución del criterio que surgió a partir de la acción de inconstitucionalidad 212/2020, este Tribunal Pleno ha sostenido que, en los casos de normas que no son exclusivas o específicas en regular los intereses y/o derechos de personas con discapacidad, la falta de consulta previa no implica la invalidez de todo el procedimiento legislativo, sino únicamente de los preceptos que debían ser consultados y respecto de los cuales el legislador o legisladora fue omiso en llevar a cabo la consulta previa conforme a los estándares adoptados por esta Suprema Corte.

73. Ha de añadirse que en el decreto que aquí se analiza únicamente se reformaron normas que están directamente relacionadas con las personas con discapacidad y su capacidad de testar, entonces es posible declarar su **invalidez total por la falta de consulta a las personas discapacidad.**

74. **Momento en el que surtirán efectos las declaraciones de invalidez.** Este Tribunal Constitucional ha determinado en diversas ocasiones que las declaraciones de invalidez surtirán efectos a partir del día siguiente al de la publicación en el Diario Oficial de la Federación de la sentencia.

75. Sin embargo, en la jurisprudencia P./J. 84/2007 de rubro: **“ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN CUENTA CON AMPLIAS FACULTADES PARA DETERMINAR LOS EFECTOS DE LAS SENTENCIAS ESTIMATORIAS”**, se estableció que las facultades del Pleno para determinar los efectos de las sentencias que emite comprenden, por un lado, la posibilidad de fijar “todos aquellos elementos necesarios para su plena eficacia en el ámbito que corresponda” y, por el otro, deben respetar el sistema jurídico constitucional del cual derivan.

76. Asimismo, se ha establecido que los efectos de las sentencias en la vía de acción de inconstitucionalidad deben, de manera central, salvaguardar de manera eficaz

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 295/2020

la norma constitucional violada, aunque al mismo tiempo, se debe evitar generar una situación de mayor inconstitucionalidad o de mayor incertidumbre jurídica que la ocasionada por las normas impugnadas, así como afectar injustificadamente el ámbito decisorio establecido constitucionalmente a favor de otros poderes públicos (federales, estatales y/o municipales).

77. Lo anterior pone en claro que este Tribunal Pleno cuenta con un amplio margen de apreciación para salvaguardar de manera eficaz el marco de regularidad constitucional. Así pues, al definir los efectos de las sentencias estimatorias que ha generado, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado, entre otras cuestiones, que estos pueden postergarse por un lapso razonable, o inclusive, generen la reviviscencia de las normas vigentes con anterioridad a las expulsadas del ordenamiento jurídico, para garantizar un mínimo indispensable de certeza jurídica.

78. Cabe puntualizar que en diversos precedentes, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido diversos plazos para que los congresos locales den cumplimiento a las declaraciones de invalidez derivadas de la falta de consulta a personas con discapacidad, como son ciento ochenta días naturales o incluso, de dieciocho meses, ante las serias dificultades y riesgos que implica celebrar las consultas respectivas durante la pandemia por el virus SARS-COV2.

79. Así, esta Suprema Corte, con fundamento en lo previsto en el artículo 45, párrafo primero, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considera que en el caso es prudente determinar que la declaratoria de invalidez total del Decreto debe postergarse por doce meses con el objeto de que la regulación respectiva continúe vigente en tanto el Congreso de esa entidad cumpla con los efectos vinculatorios precisados.

80. **Efectos vinculatorios específicos.** En este sentido, se vincula al Congreso de Coahuila para que dentro de los doce meses siguientes a la notificación que se le haga de los puntos resolutivos de esta resolución –fecha en que surtirá efectos la declaración de invalidez decretada– lleve a cabo, conforme a los parámetros fijados en esta decisión, la consulta a las personas con discapacidad –especialmente aquellas con discapacidad psicosocial– y, posteriormente, actúe conforme a sus competencias legislativas en atención plena a la participación activa y representativa de las personas con discapacidad.

81. Lo anterior, en el entendido de que la consulta a las personas con discapacidad deberá tener un carácter abierto y, con ello, se debe dar la posibilidad y facilidad de un diálogo democrático, incluyente, que busque la participación de las personas de este grupo de atención prioritaria en relación con cualquier aspecto de la regulación que les afecte. Esto será específicamente relevante con relación a la legislación concerniente al reconocimiento de su capacidad jurídica.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 295/2020

82. *El plazo establecido permite al Congreso del Estado de Coahuila atender a cabalidad lo resuelto en la presente ejecutoria. Sin embargo, el plazo no impide que en un tiempo menor el Congreso local legisle sobre el aspecto invalidado, bajo el presupuesto ineludible de que efectivamente se realicen la consulta en los términos fijados por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación y se garantice una participación activa de las personas con discapacidad, en lo individual y/o colectivo.”.*

De lo anterior, se desprende que la causa que generó la invalidez del Decreto combatido fue la falta de realización de una consulta a personas con discapacidad –especialmente aquellas con discapacidad psicosocial– previa a la expedición del Decreto 748, por el que se reforman los artículos 782, 783 y 784 del Código Civil para el Estado de Coahuila de Zaragoza.

Así, de una lectura integral de la sentencia, sus consideraciones, efectos y resolutivos, es posible advertir que su debido cumplimiento depende de que el Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza¹ cumpla dos lineamientos concretos:

- a) Desarrollar la consulta a las personas con discapacidad, especialmente aquellas con discapacidad psicosocial; y
- b) Legislar en materia de desarrollo e inclusión de personas con discapacidad.

A) Realización de la consulta en materia inclusiva.

Como quedó indicado, la sentencia vinculó al Congreso estatal a realizar la consulta a las personas con discapacidad, como lo mandata el artículo 4.3 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, para posteriormente legislar lo correspondiente en la materia inclusiva con los ajustes que se estimen pertinentes, esto, dentro del plazo señalado con anterioridad.

Sobre dicho estándar, conviene realizar algunas precisiones.

¹ La notificación de los puntos resolutivos dictados en este expediente, contenidos en el oficio SGA/MOKM/205/2022, al Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza, tuvo lugar el ocho de junio de dos mil veintidós, mediante el oficio 4744/2022 del índice de esta Suprema Corte.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 295/2020

El Tribunal Pleno, retomando la doctrina internacional existente sobre la materia, ha sostenido que los procesos de consulta a personas con discapacidad como mínimo su participación debe ser:

- a) **Previa, pública, abierta y regular.** El órgano legislativo debe establecer reglas, plazos razonables y procedimientos en una convocatoria, en la que se informe de manera amplia, accesible y por distintos medios, la manera en que las personas con discapacidad y las organizaciones que las representan podrán participar tanto en el proyecto de iniciativa, como en el proceso legislativo, dentro del cual se debe garantizar su participación, de manera previa al dictamen y ante el Pleno del órgano deliberativo, durante la discusión, por lo cual deben especificarse en las convocatorias los momentos de participación.
- b) **Estrecha y con participación preferentemente directa de las personas con discapacidad.** Las personas con discapacidad no deben ser representadas, sino que, en todo caso, cuenten con la asesoría necesaria para participar sin que se sustituya su voluntad, es decir, que puedan hacerlo tanto de forma individual, como por conducto de las organizaciones de personas con discapacidad, además de que también se tome en cuenta a las niñas y niños con discapacidad, así como a las organizaciones que representan a las personas con discapacidad.
- c) **Accesible.** Las convocatorias deben realizarse con lenguaje comprensible, en formato de lectura fácil y lenguaje claro, así como adaptadas para ser entendible de acuerdo con las necesidades por el tipo de discapacidad, por distintos medios, incluidos los sitios web de los órganos legislativos, mediante formatos digitales accesibles y ajustes razonables cuando se requiera, como, por ejemplo, los macrotipos, la interpretación en lengua de señas, el braille y la comunicación táctil. Además de que las instalaciones de los órganos parlamentarios también deben ser accesibles a las personas con discapacidad.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 295/2020

Además, el órgano legislativo debe garantizar que la iniciativa, los dictámenes correspondientes y los debates ante el Pleno del órgano legislativo se realicen con este mismo formato, a efecto de que se posibilite que las personas con discapacidad comprendan el contenido de la iniciativa y se tome en cuenta su opinión, dando la posibilidad de proponer cambios tanto a esta como durante el proceso legislativo.

La accesibilidad también debe garantizarse respecto del producto del procedimiento legislativo, es decir, el decreto por el que se publique el ordenamiento jurídico en el órgano de difusión estatal.

- d) **Informada.** A las personas con discapacidad o comunidades involucradas se les debe informar de manera amplia y precisa sobre la naturaleza y consecuencia de la decisión que se pretenden tomar.
- e) **Significativa.** Lo cual implica que en los referidos momentos del proceso legislativo se debata o se analicen las conclusiones obtenidas de la participación de las personas con discapacidad y los organismos que las representan.
- f) **Con participación efectiva.** Que abone a la participación eficaz de las personas con discapacidad, las organizaciones y autoridades que los representan, en donde realmente se tome en cuenta su opinión y se analice, con el propósito de que no se reduzca su intervención a hacerlos partícipes de una mera exposición, sino que enriquezcan con su visión la manera en que el Estado puede hacer real la eliminación de barreras sociales para lograr su pleno desarrollo en las mejores condiciones, principalmente porque son quienes se enfrentan y pueden hacer notar las barreras sociales con las que se encuentran, a efecto de que se puedan diseñar mejores políticas para garantizar el pleno ejercicio de sus derechos fundamentales en igualdad de condiciones, no obstante el estado físico, psicológico o intelectual que presenten en razón de su discapacidad, así como por su género, minoría de edad, y con una cosmovisión amplia de las condiciones y dificultades sociales, como las

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 295/2020

condiciones de pobreza, de vivienda, salud, educación, laborales, entre otras.

g) **Transparente.** Para lograr una participación eficaz es elemental garantizar la transparencia en la información que generen los órganos estatales, la que aporten las personas con discapacidad y las organizaciones que las representan, así como del análisis y debate de sus aportaciones.

Actuaciones de cumplimiento.

El Congreso estatal informó a este Tribunal sobre las acciones encaminadas a demostrar la observancia de la sentencia; en ese sentido, se destaca lo siguiente:

- 1) En autos consta la lista de las diversas asociaciones que representan a las personas con discapacidad, en la que el Congreso del Estado tiene comunicación a efecto de dar cumplimiento a la sentencia.
- 2) Minutas de reuniones de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, en las que se someten para su estudio y análisis los foros de consulta, así como el anteproyecto de dictamen de la referida comisión relativo a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos impugnados en el presente asunto.
- 3) La Coordinación de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia de la Sexagésima Segunda Legislatura del Congreso Estatal emitió la Convocatoria para foros de consulta, la cual se publicó en diversos periódicos de mayor circulación en el Estado y mediante diversos medios.
- 4) Actas fuera de protocolo mediante las cuales se da fe de la celebración de las etapas de consulta realizadas en tres sedes del Estado de Coahuila de Zaragoza.

La consulta se llevó a cabo de manera presencial en diversas sedes y fechas a saber, el dieciséis en Saltillo, el dieciocho en Torreón y veinticinco en

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 295/2020

Sabinas, todas en mayo de dos mil veintitrés en la entidad, en la que se advierte se involucraron los integrantes de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia del Congreso del Estado, personas con discapacidad y asociaciones e instituciones de la sociedad civil.

Posteriormente, se presentó una iniciativa con proyecto de decreto por el que se por el que se reforman los artículos 782, 783 y 784 del Código Civil para el Estado de Coahuila de Zaragoza, la cual se turnó a la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia del Congreso del Estado para su análisis y dictamen correspondiente.

En esa tesitura, se advierte que se cumplieron con los distintos principios que rigen e integran el proceso de consulta en materia inclusiva, pero no corresponde a este pronunciamiento verificar si la consulta es válida desde el punto de vista sustantivo, ya que no fue materia de análisis en la presente ejecutoria, toda vez que el vicio de constitucionalidad que se buscó subsanar fue la omisión absoluta de consulta.

B) Emisión de la legislación correspondiente.

Con base en los resultados de dicho proceso, el referido Congreso aprobó el Decreto 478 por el que se reforman los artículos 782, 783 y 784 del Código Civil para el Estado de Coahuila de Zaragoza, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno de la entidad el veintisiete de junio de dos mil veintitrés.

Lo anterior quedó acordado de conformidad en proveído de nueve de junio de dos mil veinticinco.

Cuestión que es un hecho notorio para este Tribunal, al constar dicha publicación en la página web del citado periódico oficial².

² <https://periodico.segobcoahuila.gob.mx/BusquedaPorA%C3%B1o.asp?Ano=2023>

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 295/2020

Determinación.

De lo anterior y del análisis integral de las constancias, se concluye que el Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza **dio debido cumplimiento a la ejecutoria de mérito, al:**

a) Llevar a cabo un proceso de consulta conforme a los lineamientos establecidos por la Suprema Corte; y

b) Emitir y publicar el Decreto de referencia, que sustituyó al diverso invalidado, con observancia al mandato constitucional y convencional correspondiente.

En consecuencia, con fundamento en los artículos 44, 46, párrafo primero y 50 de la citada Ley Reglamentaria, **se declara cumplida la sentencia dictada en el presente asunto.**

Con la precisión que el aspecto sustantivo de la consulta y las nuevas normas, en su caso, debieron impugnarse mediante un nuevo medio de control constitucional.

Archivo.

Toda vez que obran todas las notificaciones relativas a la sentencia y voto formulado en relación con dicho fallo³, aunado a que resulta un hecho notorio que dicha resolución y voto se publicaron en el Diario Oficial de la Federación,⁴ en el Periódico Oficial del Estado de Coahuila de Zaragoza,⁵ así como en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta,⁶ una vez que cause estado el presente auto, **se ordena el archivo definitivo del expediente como asunto concluido.**

³ Conancias que obran a fojas 474, 475, 478, 479, 607, 608, 609, 714, 715 y 716 del expediente.

⁴ Conancias que obran a fojas 490 a 499 del expediente

⁵ Conancias que obran a fojas 794 a 816 del expediente.

⁶ Consultar las publicaciones en las siguientes ligas:

<https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/ejecutoria/31025>

<https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/voto/45362>

<https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/voto/45341>

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 295/2020

Formas de notificación.

Notifíquese por lista, por oficio, en su residencia a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Coahuila de Zaragoza y mediante diverso electrónico a la Fiscalía General de la República.

En virtud que las referidas autoridades estatales tienen su residencia fuera de esta ciudad, vía **MINTERSCJN** gírese el **despacho 1342/2025** al Juzgado de Distrito en el Estado de Coahuila, con residencia en Saltillo, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común, para que en el plazo de tres días realice la notificación respectiva.

Con la precisión al órgano jurisdiccional que al devolver el despacho **únicamente debe remitir la constancia de notificación y la razón actuarial correspondiente.**

Cúmplase.

Lo proveyó el **Ministro Hugo Aguilar Ortiz, Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación**, quien actúa con **Fermín Santiago Santiago**, Secretario de la Sección de Trámite de Controversias Constitucionales y de Acciones de Inconstitucionalidad.

Esta hoja corresponde al acuerdo de veinticuatro de noviembre de dos mil veinticinco, dictado por el **Ministro Hugo Aguilar Ortiz, Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación**, en la acción de inconstitucionalidad 295/2020, promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. **Conste.**
CAGV/RAHCH

AC de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

Firmante	Nombre	HUGO AGUILAR ORTIZ	Estado del certificado	OK	Vigente
	CURP	AUOH730401HOCGRG05			
Firma	Serie del certificado del firmante	706a6620636a6633000000000000000000042ad	Revocación	OK	No revocado
	Fecha (UTC / Ciudad de México)	25/11/2025T00:05:42Z / 24/11/2025T18:05:42-06:00	Estatus firma	OK	Valida
	Algoritmo	SHA512/RSA_ENCRYPTION			
	Cadena de firma				
		99 9f cf e7 53 9f 36 aa 4e aa d8 ef ed 95 11 8e 27 3a 21 72 4f 54 7a ef 8a 6e af 95 b3 ba ba 21 37 d3 d7 70 11 c2 c6 70 8c 84 6c 62 f5 93 a7 ae f3 40 6b cf a1 3a 2b d8 5d 4f 93 fc 9e c0 57 04 05 bc df 01 9d 00 7a 1a 92 3f a7 dc 80 c2 d9 45 07 78 7e c7 82 2b b6 52 a6 4a fc 47 20 92 f4 d5 a5 10 49 ef 30 22 ba 48 90 f2 21 07 79 8f b4 f3 77 43 e4 87 ad 46 a4 cb 39 90 5d d4 7a 02 74 59 d4 06 af f6 66 c7 e0 11 d4 20 1e 69 8e e5 14 ea 65 be 25 b3 4e 4c 7a 3f 95 72 8a 5b ef 65 ed 5e 0f 1c f4 96 80 dc 72 f7 da b2 a8 97 28 9f d0 21 5e 10 14 e2 9c 1d d3 7b e0 36 10 0b 1f 81 fa 5f b6 a6 6f 93 1b 12 65 11 61 1a e1 ae 77 a7 2c 67 67 74 bf 59 2b b5 9f 48 e8 58 2a c9 61 ce 24 70 dc b0 6e bc a1 bc 02 90 46 0a 2b 47 63 dd ed df ae 35 6f 93 fa f9 af 57 ef ef db 66 7c d3 15 a1 75 30 7c 94 41 7b 81 d8 1f 02 fb ac ce c4 6b b8 62 f3 3f 59 72			
Validación OCSP	Fecha (UTC / Ciudad de México)	25/11/2025T00:05:42Z / 24/11/2025T18:05:42-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta OCSP	Servicio OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
	Emisor del certificado de OCSP	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
	Número de serie del certificado OCSP	706a6620636a6633000000000000000000042ad			
Estampa TSP	Fecha (UTC / Ciudad de México)	25/11/2025T00:05:42Z / 24/11/2025T18:05:42-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta TSP	TSP FIREL			
	Emisor del certificado TSP	Autoridad Certificadora Intermedia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Identificador de la secuencia	759742			
	Datos estampillados	84BCECD08F423CCF2D066B2458754A12C222AA612C70CECA0C1A07B1C360FBEEA7D			

Firmante	Nombre	FERMIN SANTIAGO SANTIAGO	Estado del certificado	OK	Vigente
	CURP	SASF820211HOCNNR06			
Firma	Serie del certificado del firmante	706a6620636a6633200000000000000000007587	Revocación	OK	No revocado
	Fecha (UTC / Ciudad de México)	24/11/2025T23:42:03Z / 24/11/2025T17:42:03-06:00	Estatus firma	OK	Valida
	Algoritmo	SHA512/RSA_ENCRYPTION			
	Cadena de firma				
		13 b1 87 38 5b ea 8a ad 73 7b 73 d9 b2 23 54 f4 3a b8 24 14 56 0f 92 5b e6 7f 90 28 20 35 06 7a b6 e7 29 e7 d2 e3 84 24 50 c8 30 25 5a 03 da 69 29 52 61 8e ad b2 94 74 3b 9f 0a c7 b9 e4 80 dc aa be bf 3d 29 02 8c 2b 77 c5 42 21 af 4b 01 9e 03 cb e9 ea af 2d a2 1f 36 02 75 76 e8 6f fc 0e e6 85 c2 68 14 80 1c a0 e7 af df 17 e6 c6 02 6e 9e 5f bd 96 11 c8 40 b8 7b 4e 8a e5 1e 3c bc 16 66 e3 87 b6 67 41 09 85 4f 8a 87 8c 37 9b d1 cc 96 d4 8c 3b bf 28 2c 1b ec 85 8f 8d b2 f9 a7 c7 c9 07 ec 8a 1b 05 22 62 1f 0b 07 2e 39 fb 42 10 d5 ea dc 73 84 0d b6 18 5e 6c bf e6 3a ee 59 1c 63 e2 cb be 20 3e 9f 2c 97 d3 65 f7 a5 fc e7 19 87 6a 1c 96 93 2d 1c 45 ae 56 7b 5a 01 75 f1 56 ac e8 a7 9b d8 d9 c8 cf 1c 08 5f f6 89 3e 50 cd e0 70 c7 1e 31 f3 62 41 b9 ba 50 ca df 1e 67 69			
Validación OCSP	Fecha (UTC / Ciudad de México)	24/11/2025T23:42:03Z / 24/11/2025T17:42:03-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta OCSP	Servicio OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
	Emisor del certificado de OCSP	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
	Número de serie del certificado OCSP	706a6620636a6633200000000000000000007587			
Estampa TSP	Fecha (UTC / Ciudad de México)	24/11/2025T23:42:03Z / 24/11/2025T17:42:03-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta TSP	TSP FIREL			
	Emisor del certificado TSP	Autoridad Certificadora Intermedia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Identificador de la secuencia	759546			
	Datos estampillados	F2C2C496C9468C1C4277CE52D4484C7D9336FCF1A8F4807D0A9F8F7CB71A3E3EFFF9			